¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!

combate

órgano central de la liga comunista

IV internacional

La declaración del Gobierno: continuidad en lo político y en lo económico

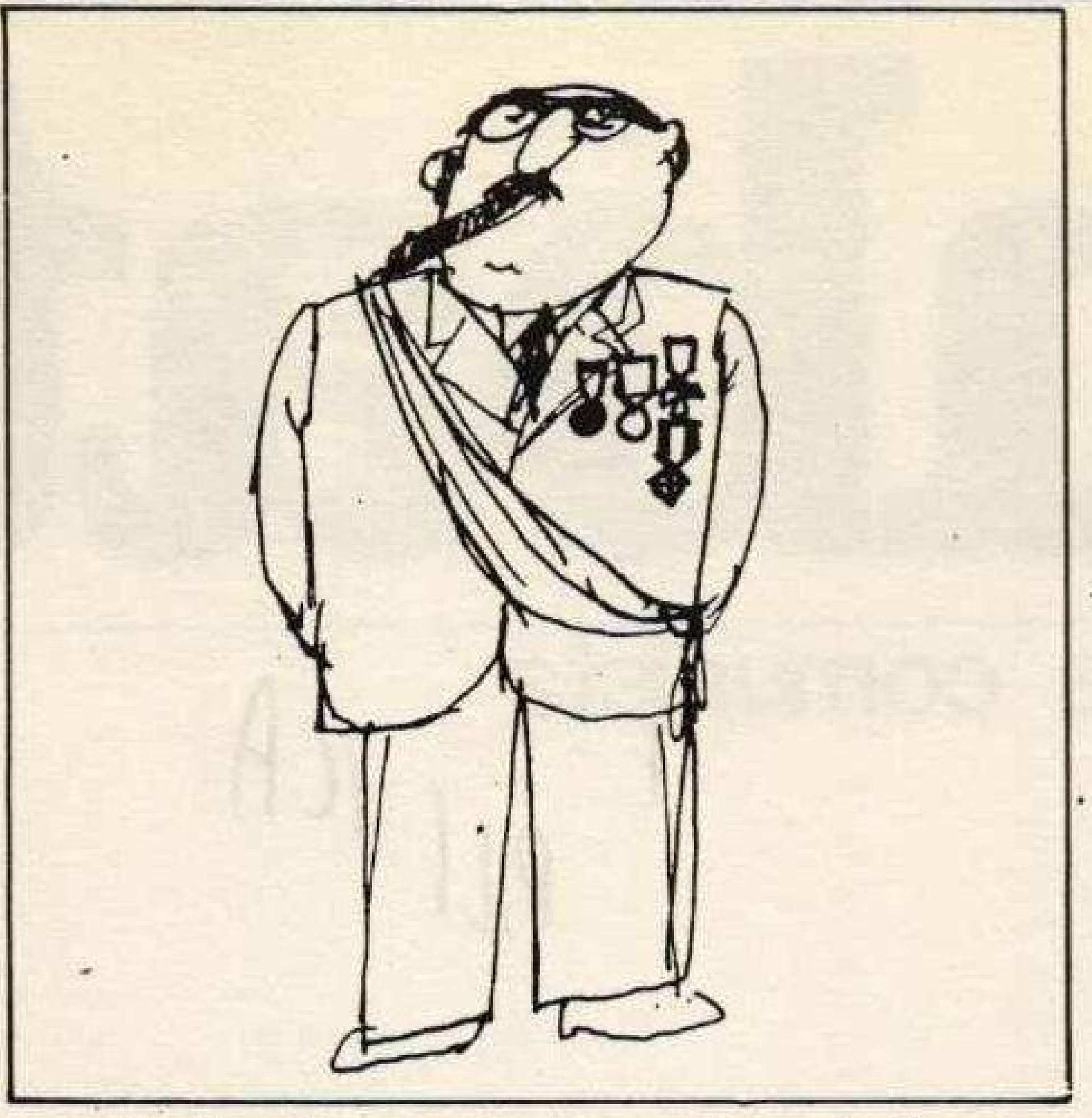
En el anterior editorial de COMBATE adelantábamos el carácter del nuevo gobierno analizando sus componentes. Personajes ligados a la historia del franquismo a quienes su instinto de salvación ha agrupado tras Suárez. De su política teníamos un año de experiencia: ceder en lo que el movimiento de masas se impone para mantener todo lo posible de las instituciones y leyes del franquismo. Personajes ligados al gran capital financiero e industrial que buscan hacer pagar la crisis a los trabajadores.

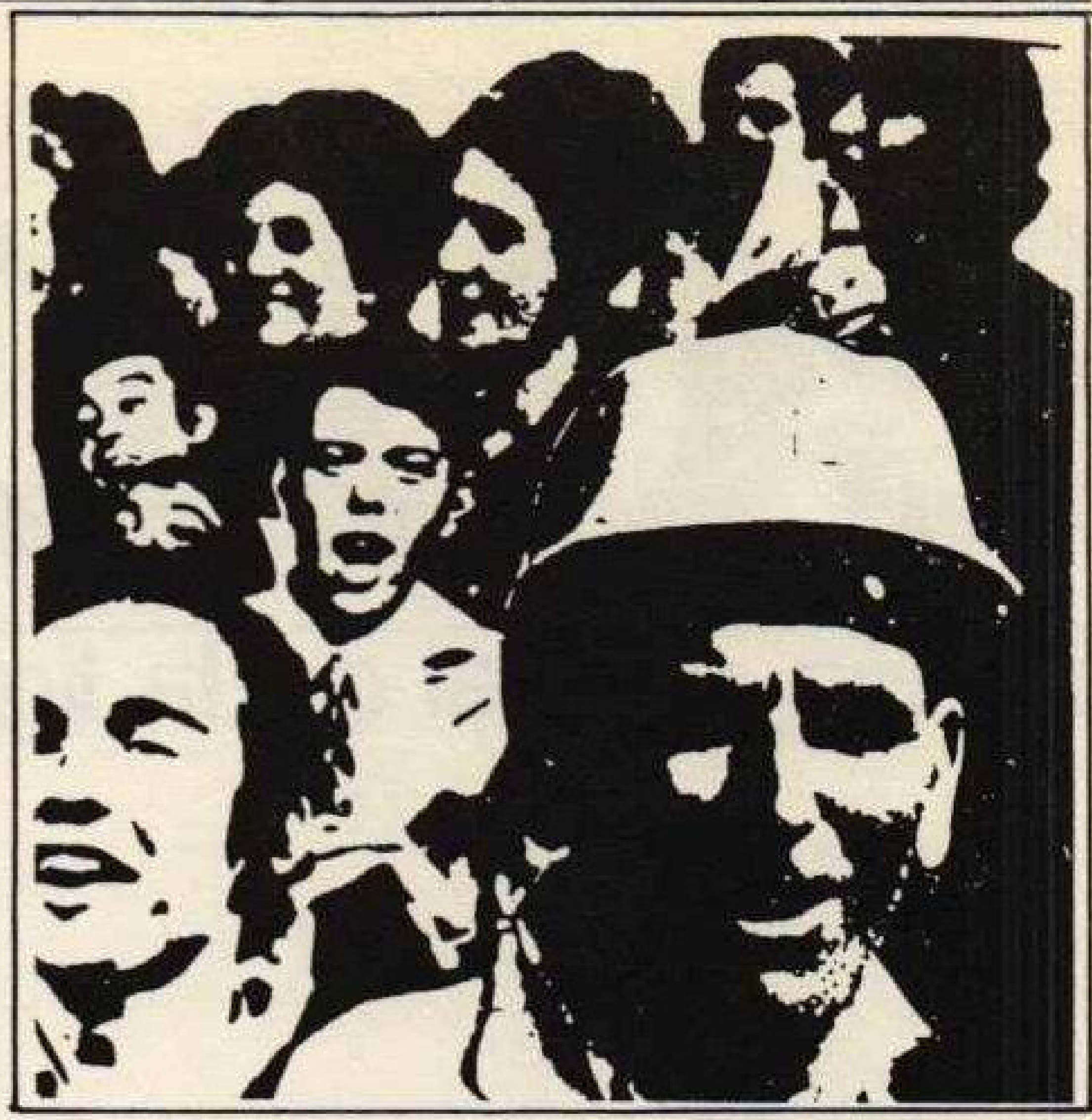
La declaración programática publicada tras el Consejo de Ministros del 11 de Julio confirma dichas afirmaciones.

En el terreno político pretende ser la continuidad del anterior. Avala el falseamiento de los resultados electorales en los que Suárez por medio del bicameralismo, los "senadores de designación real", la ley electoral, la falta de libertades plenas, la negativa del voto a 4.000.000 de jóvenes y más de 1.000.000 de emigrantes, consigue la mayoría. Y propone que esta mayoría trucada elabore la Constitución, a la que deben someterse, sea negociando, sea votando en contra, la minoría de diputados de los partidos obreros.

→







En los mismos días de su declaración programática varios hechos nos muestra la Constitución que se puede esperar de él: las brutales intervenciones contra la población, contra las manifestaciones, se han sucedido —Asturias, Valladolid, parados de Barcelona, causando un muerto en Suria—. La prohibición de E.R.C., las sucesivas ampliaciones del indulto para no dar la amnistía total. Los hechos hablan sólos. Sobre el llamado "problemas de las Nacionalidades" también la declaración es clara, no serán ni Euskadi, ni Catalunya, ni Galicia, ni el País Valenciá, ni Baleares, ni Canarias, las que decidirán libremente su futuro. Serán las Cortes de Madrid, las que decidirán por ellas. Y la decisión será en los marcos que quiera el Centro Democrático. Para adelantar cuáles son sus propósitos propone una Mancomunidad de las actuales Diputaciones y Cabildos. Es decir, todo menos dar la palabra a las Nacionalidades para que, ejerciendo el derecho de Autodeterminación decidan su destino.

La fuerza que la clase obrera muestra día a día, la voluntad de acabar con la Dictadura, se enfrenta de forma inmediata con los Ayuntamientos franquistas. Para impedir que éstas lleven a cabo su tarea el gobierno ya tiene su proyecto: reformar la franquista Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local. Esta Ley se opone a los Ayuntamientos elegidos totalmente y con plenas libertades, reduce sus atribuciones, en la práctica a la de simples administradores de las decisiones de Madrid. La reforma de esta ley no puede satisfacer la exigencia de Ayuntamientos libremente elegidos y con plena autonomía en los asuntos municipales.

Llegan incluso a temer que en el marco de su propia reforma la fuerza de la clase obrera eche abajo sus proyectos. Retrasan la convocatoria de elecciones municipales hasta final de año... y mientras tanto que se mantengan a toda costa los Ayuntamientos franquistas actuales.

Los aspectos políticos de su programa se pueden resumir en atacar la soberanía del pueblo y las nacionalidades, impedir una Constitución que garantice los derechos democráticos, conceder sólo aquello a lo que les obligue la lucha del pueblo, y aún en este caso recortando al máximo, mantener en la medida de lo posible las instituciones legislación, cuerpos represivos, heredados del franquismo.

Sus proyectos económicos, que analizamos detenidamente en las páginas 4 y 5 se pueden sintetizar en una frase: "Salir de la crisis favoreciendo a los empresarios y cargando sus efectos sobre las espaldas de los trabajadores".

No es de extrañar que para imponer este plan económico busquen anular los derechos de la clase obrera y el pueblo.

Las constantes luchas del pasado año, el mismo resultado de las elecciones, muestran el deseo de la mayoría: acabar con el franquismo, la monarquía, sus instituciones y cuerpos represivos. Conquistar las libertades plenas y ahora.

Devolver la soberanía al pueblo por medio de unas Cortes Constituyentes libremente elegidas, de una sóla cámara, sin Senadores de designación real y, elegida por todos, incluyendo a jóvenes y emigrantes. Dar una salida a la crisis económica al servicio de los trabajadores. Tras estos objetivos está la mayoría de la población. Ninguno de ellos se pueden esperar del gobierno Suárez. Es preciso acabar con él.

En su lugar un Gobierno del PSOE-PCE sin ningún ministro burgués estaría en condiciones de satisfacer estas reivindicaciones. Contaría con el apoyo de la mayoría de la población como se mostró en las recientes elecciones. Con su movilización podría anular los ataques de la reacción.

No esperar, empezar la lucha. Los partidos obreros se niegan a luchar por el GOBIERNO, con ello dan su beneplácito a que siga Suárez. Se proponen pactar con él la Constitución, la salida de la crisis económica, los derechos de las Nacionalidades. Llaman a los trabajadores a esperar y confiar en las gestiones de los diputados obreros en lugar de movilizar.

De los pactos con Suárez sólo se puede esperar la negativa a las reivindicaciones obreras y populares. Los partidos obreros, sus diputados, no deberían aceptar esos pactos y denunciar su contenido. Dichos partidos en lugar de llamar a confiar en los resultados de unas Cortes en que la burguesía ha amañado la mayoría, deberían volcar sus fuerzas, utilizar sus escaños en denunciar el caracter de estas Cortes, y sin esperar nada de sus resultados impulsar y apoyar las movilizaciones. En esta vía, que se ha mostrado como la única capaz de conseguir victorias, tendrán nuestro apoyo.■

A. Figueras

Aviso

Combate, atendiendo a las vacaciones que tradicionalmente se toman a principios de agosto no aparecerá en su próxima cita quincenal. El próximo número aparecerá el 24 de Agosto.

Salud y buenas vacaciones

Comité de Redacción

¡libertad para Apala!



"APALA", militante de ETA, esta detenido en Francia. El Gobierno Suárez esta pidiendo la extradición para juzgarle por ser antifranquista. Con ello se enfrenta de nuevo al veredicto que ha dado el pueblo: AMNISTIA TOTAL. En un empeño de seguir juzgando y encarcelando a luchadores por la libertad, sean correctos o no sus métodos, cuenta con la colaboración del gobierno francés. El pueblo del estado español cuenta en su lucha con la clase obrera francesa que esta interesada en la causa de su libertad. Esta lucha comun hoy tiene un nombre: libertad para Apala.■

¡legalización ya!

De nuevo el libre albedrio del Gobierno es la voz todopoderosa que decide a quien se legaliza, y a quien no. Mientras PTE, ORT y carlistas han sido ya legalizados, continuan proscritos varios partidos nacionalistas, republicanos y otras organizaciones como nuestro partido.

El gobierno pretende entremeterse incluso con la independencia de las organizaciones juveniles a las que exige su consideración como alas juveniles de sus partidos hermanos para ser reconocidas, como es el caso de la Joven Guardia Roja.

El gobierno no tiene derecho alguno a mantener en la ilegalidad a una serie de organizaciones cuando el objetivo de la legalización sin exclusiones ha sido masivamente asumido por la población. Con ello demuestra patentemente que sigue con los mismos métodos autoritarios y discriminatorios de la mejor época franquista.

Nosotros exigimos la inmediata legalización de todos los partidos y denunciamos las injerencias que el Gobierno trata de llevar adelante en otras organizaciones. Son los afiliados a una organización los que deben decidir como se denomina o cual es su "status" y sobre ello no puede aceptarse la intromisión de Martin Villa y el Gobierno Suárez.■

amnistía: aún pendiente



El cuentagotas de la amnistía, sigue goteando sin acabar de vaciarse.

Tras las elecciones, tras los saludos entre el Presidente Suárez y Dolores Ibarruri, tras los apartes entre Carrillo y Fraga, tras todo esto, siguen aun presos políticos en las cárceles siguen los regímenes penitenciarios medievales que han dado lugar a la reciente lucha de los presos comunes.

Ello pone sistemáticamente sobre la mesa lo que algunos parecen olvidar y es que sigue pendiente la consecución de la amnistía sin exclusiones, y que este objetivo no puede ser abandonado a la dialéctica parlamentaria sino que debe ser arrancado con la acción de masas. Que el fin de los extrañamientos, la vuelta de los exiliados, sigue aun por conseguir, y que su logro no puede ser ya mas aplazado.

Entretanto el PSOE y el PCE se limitan a esperar firmemente asidos a sus escaños a que se reunan las Cortes para "entonces" presentar una petición de legalización sin exclusiones.

Nada debe demorar la imposición en la práctica de la legalidad para todas las organizaciones obreras sin exclusiones.■

RESPUESTA OBR
AL PROGRAMA DE A

Las cuestiones económicas ocupan amplio espacio en la declaración programática del gobierno Suárez. Un equipo ministerial claramente representativo de los intereses económicos y financieros del gran capital español e internacional. Hombres dispuestos a salvaguardar los intereses de banqueros y empresarios a través de un auténtico plan de estabilización económica. Para imponerlo a los trabajadores asalariados se busca la complicidad de los partidos obreros y centrales sindicales ofreciendo determinadas promesas cuyo futuro nadie garantiza.

Dicho proyecto es una declaración de guerra a la clase obrera. Se hace precisa una **urgente** respuesta obrera para impedir la aplicación de las medidas económicas. Si no hay respuesta ante las primeras (aumento de los precios...) seguirán otras peores como el bloqueo total de los salarios. Ha de ser una respuesta **masiva** de los trabajadores y asalariados del campo y la ciudad. Oponiendo su unidad a la patronal y su gobierno. También ha de ser una respuesta **decidida** llevando a la calle la firme determinación de impedir la continuidad de las medidas del gobierno.

No hay ni puede haber ninguna razón que aplaque o impida que los trabajadores expresen con su lucha el más enérgico rechazo a un programa de miseria y paro.

salvar al capitalismo a costa de los trabajadores

En la exposición de motivos de la declaración del gobierno se enumeran los síntomas de los males de la economía española. Se hace una ambigua crítica al período anterior a la muerte de Franco. Pero Suárez y su anterior gobierno no se incluyen entre los culpables de la grave situación económica. Tampoco se menciona la responsabilidad de la monarquía en la agravación de la situación económica en estos casi dos años de reinado de Juan Carlos. De esta forma se obscurece la continuidad que perpetuan este gobierno y la monarquía, que ha tenido en la economía una evidencia total.

El programa económico del gobierno es sumamente general. Ello hace difícil una crítica a fondo, al no integrar la serie de medidas concretas que exige tal programa.

A pesar de ello en el programa se resalta que las preocupaciones fundamentales del gobierno son la inflación y el déficit exterior. Tanto es así que la primera medida práctica ha sido la devaluación de la peseta. Con ello todos los productos que compramos al exterior aumentan de precio. Y teniendo en cuenta que las dos terceras partes de lo que se consume viene del extranjero la subida de los precios de muchos productos va a ser inmediata. Van a subir la gasolina, los transportes, la electricidad, los automóviles. Aumentará el precio del pollo, el pescado, la carne, el café, el azúcar...Es decir, prácticamente todo.

Si no se quiere que la devaluación sirva solamente para aumentar todavía más la inflación, el paro y el déficit exterior ha de ir acompañada por "medidas complementarias" de rigurosa austeridad. Es decir, en palabras del gobierno "si no se frenan los salarios la inflación seguirá creciendo". De ahí que siguiendo la tónica de las congelaciones salariales de 1959, 1967, 1968, 1969, 1973 y 1975 se intente un bloqueo total de los salarios para un tiempo no inferior a un año como mínimo.

A cambio de esta medida el gobierno ofrece la "promesa de ir hacia una reforma fiscal". Esta reforma fiscal se reduce a unos futuros proyectos de leyes a discutir en las Cortes (impuesto sobre el patrimonio, lucha contra el fraude fiscal...). Una reforma cuya viabilidad está en entredicho por el carácter de estas Cortes con mayoría burguesa. Y que se puede eternizar mientras los trabajadores ven de inmediato como sus salarios son congelados.

Respecto al problema del **paro las medidas que se proponen se reducen a perfeccionar el seguro de desempleo y contribución del estado en una mayor proporción** en los gastos de la Seguridad Social. Pero ambas medidas se remiten al logro de incrementos de la recaudación a partir de los impuestos. Mientras tanto ninguna medida efectiva se propone.

Tampoco sirven las promesas de impulsar un plan de gasto público sin explicar de donde se sacarán las enormes cantidades de dinero y exactamente a donde irá destinado. Al recaer en empresas privadas la mayor parte irá a parar a los beneficios de empresarios y solo una pequeña parte a los salarios.

Junto a estas medidas se anuncia una mayor liberalización y flexi-

ERA STERIDAD

bilidad económica y de mercado, suprimiendo controles del estado. Es decir, un intento de volver al liberalismo económico que solo ha significado en su historia la miseria y el paro para los trabajadores.

El mismo gobierno reconoce que la aplicación del programa económico debe contar con la colaboración de los partidos y sindicatos obreros en la tarea común de salvar la economía. Esta constatación es una prueba que el gobierno es incapaz de imponer este drástico plan de estabilización si los sindicatos no se prestan a compromisos contrarios a los trabajadores. ■

PCE-PSOE, complicidad con el gobierno

Tras ser llamados a la Moncloa por Suárez para explicarles el alcance del programa económico los dirigentes del PCE y del PSOE se apresuraban a declarar que "las medidas económicas del gobierno son, en buena parte, positivas" (Santiago Carrillo) e incluso que "algunos puntos de la declaración del gobierno sobre temas económicos suenan a los que hemos defendido durante la campaña electoral" (Felipe González).

Ni el PCE ni el PSOE, partidos obreros mayoritarios, han reaccionado con la celeridad necesaria para denunciar este programa antiobrero del gobierno.

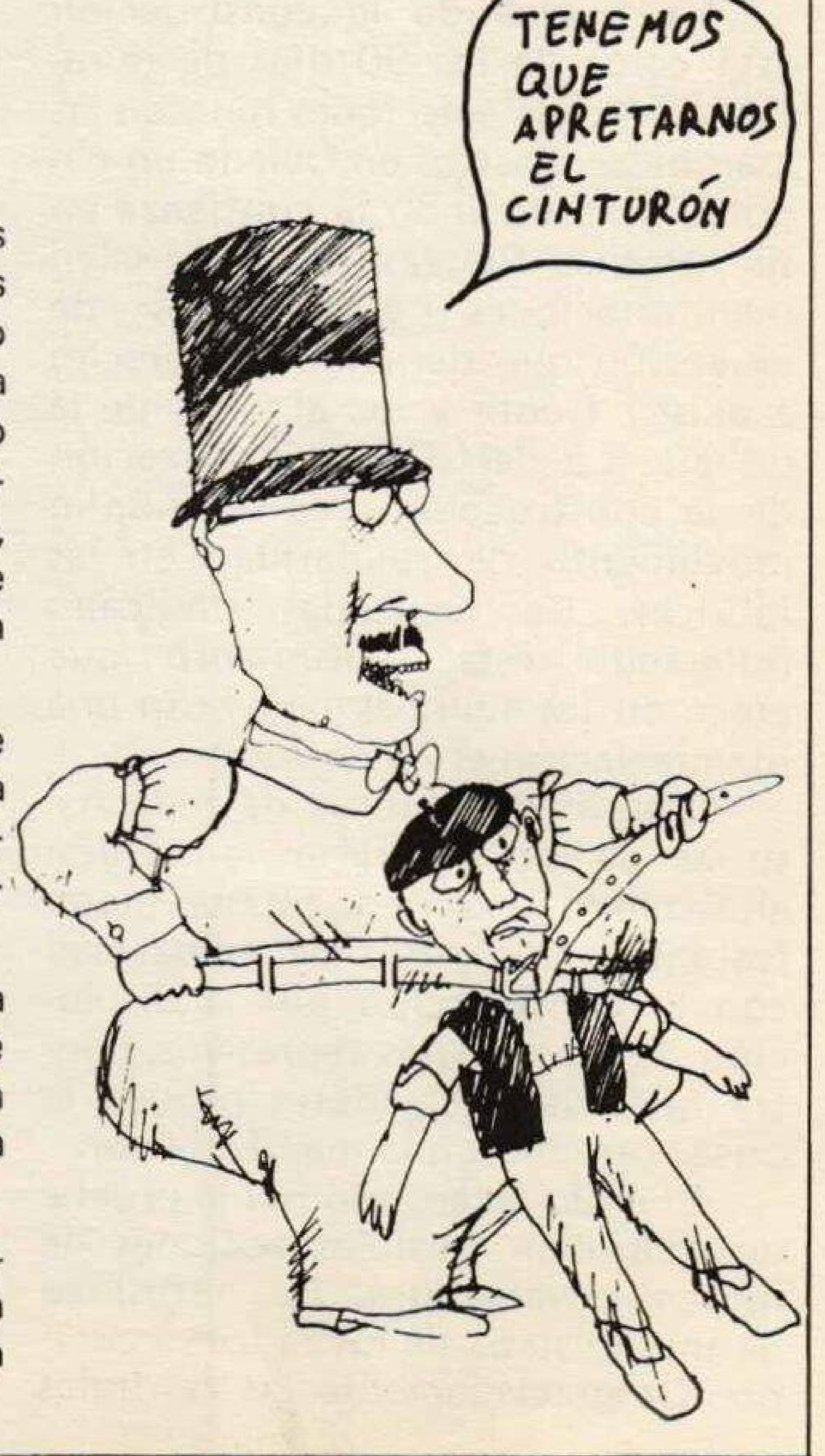
Tampoco las centrales sindicales, CCOO, UGT y USO, se han pronunciado en contra. Unos y otros han rivalizado en añadir o quitar comas a la declaración de guerra contra los trabajadores. Y todos ellos han remitido la crítica del programa hasta que se concreten las medidas de su aplicación.

Llegar a decir como Felipe González que dicho programa recoge puntos defendidos por el PSOE sólo demuestra la incapacidad de este partido en preconizar un programa económico basado en los intereses obreros. Y en efecto sin mencionar siquiera el problema de las expropiaciones y nacionalizaciones el PCE y el PSOE se mostraban dispuestos a aceptar la vía capitalista de la salida de la crisis a costa de los trabajadores. Como declaraba Felipe González los objetivos de este partido se cifran "en la colaboración a través de una negociación continuada armonizando los respectivos intereses para la superación de la crisis". Pero pretender armonizar los intereses de capitalistas y trabajadores es tanto como pretender la cuadratura del círculo, a no ser que se sometan como es habitual, los intereses de los segundos a los de los primeros. Los capitalistas han elaborado su programa económico que salvaguarde sus intereses. Los trabajadores deben oponer a este un programa que defiende los suyos ante los ataques del capital. En vez de esto tanto el PCE como el PSOE se avienen a negociar la aplicación de un plan contrario a los intereses obreros.

Y esto se diga como se diga es entrar en la vía del pacto social. ■

los hombres del gran capital

Las biografías de los ministros del último Gobierno Suárez constatan a los mismos como los representantes directos del gran capital financiero y de las multinacionales extranjeras. Están los hombres de la gran banca como Alberto Oliart (Banco Hispano Americano, Urquijo), como Lladó y Fernandez Urrutia (Banco Mercantil, conexiones a través de la familia con Urquijo), Landelino Lavilla (exconsejero de Banesto), Marcelino Oreja (Banco Guipuzcoano). Hombres, todos ellos, presentes en los Consejos de Administración de las grandes empresas (RENFE, Cros, Astilleros Españoles, Campsa, Agroman, Galeprix...). Con Garrigues Walker el capital extranjero tiene un cualificado representante en el gobierno (su familia ha ocupado cargos en más de 30 Consejos de Administración entre ellos los de IBM, General Electric, Standard...).



Estos son los hombres que intentan abordar la crisis económica desde el punto de vista de la gran banca, de los monopolios y de las multinacionales. El gran capital ha copado el gobierno para vigilar muy de cerca que sus intereses serán preservados. Está dispuesto a gestionar, sin intermediarios, pasando incluso por encima de intereses particulares de ciertos sectores burgueses, el poder político.

Y para tratar de conseguir el consenso de las diversas fracciones de la burguesía se ha situado a uno de sus peones, Fuentes Quintana, al frente del Ministerio de Economía. Se trata de alguien con experiencia en el plan de estabilización de 1959 colaborando con Ullastres en arrojar a miles de trabajadores al paro, la miseria y la emigración. Y ahora esta es también la apuesta actual del gran capital.

Si el capital tiene su gobierno, los obreros deben exigir el suyo: un gobierno PSOE-PCE. ¿Por qué no llaman a la lucha por tal gobierno estos partidos?. ¿Por que se disponen a colaborar con Suárez y sus ministros traicionando el sentido del voto que depositó en ellos la clase obrera?. ■

VALLADOLID: lucha obrera

Durante los primeros días de julio hemos vivido en Valladolid una de las más grandes movilizaciones. Su origen fue una Huelga del Servicio de la Limpieza por reivindicaciones económicas y sociales. Ante la dureza del Ayuntamiento y el despido de toda la plantilla, los barrios se levantaron en contra de la Corporación Municipal y en solidaridad con el Servicio de Limpieza. La movilización de los barrios y empresas (FASA, NICAS, SAVA-ENASA, etc...) adquirieron una magnitud insospechada con manifestaciones, barricadas, etc... La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, respuesta que fue la misma que la de los últimos 40 años: la represión. Así que el mismo día que se daba a conocer el nuevo Gobierno, en el barrio de la Rondilla, "las fuerzas del orden" disparaban contra los manifestantes, produciendo fuertes enfrentamientos, con varios heridos y 2 detenidos, que nos hacían recordar las últimas actuaciones del Gobierno y su policía en Euskadi. Tras esto la lucha de los barrios se extendió a las fábricas más importantes con paros intermitentes y manifestaciones todos los días desde los barrios hacia el centro. La policía por primera vez tuvo que retroceder. Los barrios eran terreno prohibido para ellos que se limitaban a mantener "el orden" en el centro de la ciudad.

Ante la situación insostenible, el Ayuntamiento optó por sacar el ejército a la calle, a recoger la basura, cumpliendo asi la tarea que se viene asignando ultimamente a los soldados, la tarea de Rompehuelgas.

La característica de esta movilización fue la desorganización, la falta de un centro dirigente salido de las escasas asambleas de barrio (Rondilla, Pilarica, Delicias) que hubiera servido para organizar y extender la lucha. Ante esta desorganización, la actitud de los Partidos y Sindicatos fue la de no potenciar las Asambleas y allí donde existían, utilizaban las Asociaciones de Vecinos como instrumento de control, además de sacar continuos comunicados llamando a la actitud serena y responsable frente a las cargas durísimas de la policía.

La negociación del conflicto estaba a cargo de los parlamentarios del PSOE que actuaban de mediadores, de los representantes de los Sindicatos, especialmente la CSUT y Trabajadores de la Limpieza. En ningún momento entraron representantes de los barrios, ni en la práctica negociaron los trabajadores. Los objetivos de los Partidos hegemónicos no eran otros, se trataba de contener la lucha y esto se hacía a través de las Asociaciones de Vecinos y de los Sindicatos.

Sin embargo la lucha directa de los trabajadores consiguió conquistas muy preciadas (aumento de 2.000 pts., readmisión de despedidos y abono de los días de huelga). ■

Corresponsal

ASTURIAS: la lucha generalizada consigue victorias

La huelga de la construcción está cerca de los 90 días de duración. Tras las elecciones renacen las asambleas masivas en Oviedo uniéndolos y reforzando la confianza en sus propias fuerzas. De ellas salen manifestaciones y piquetes de extensión que defiende su derecho a existir frente a los ataques de la policía. La decisión y organización de la construcción crea un amplio movimiento de solidaridad en las fábricas. Las centrales sindicales reflejando este sentimiento que crece en las fábricas convocan una manifestación el 28 de Junio.

Grupos de obreros de toda Asturias se concentraron en Gijón alcanzando la cifra de 50.000 manifestantes. Los gritos de solidaridad con la construcción por la disolución de los cuerpos represivos, contra que los trabajadores paguen la crisis, presidieron la manifestación.

El éxito alcanzado fue la prueba de que eran posibles acciones de mayor envergadura. La necesidad de una jornada de lucha tomó cuerpo. Desgraciadamente las centrales sindicales, si bien dieron su apoyo a la jornada no plantearon ninguna acción concreta a realizar. A pesar de ello la respuesta obrera fue impresionante. Mas de 80.000 fueron a la huelga. Hubo concentraciones de pequeños talleres y obreros de la construcción en Gijón.

Tras el éxito de la Jornada de Lucha y la cerrazón de la patronal, los huelguistas retomaron la acción de piquetes para preparar una acción aún mayor.

El PCE y el PSOE propusieron una marcha hacia Madrid. Ello creaba el peligro de que los huelguistas, que eran los únicos que podían secundar esta acción se dividiesen y aislasen del resto, de la población, sin embargo el movimiento de solidaridad fue amplísimo en fábricas y barrios.

El gobierno y la patronal comprendieron que cuanto mas se alargaba la lucha mas se fortalecía por la solidaridad recibida y prefirió hacer concesiones. La tabla reivindicativa fué aceptada por el delegado de trabajo. Si bien las grandes empresas estuvieron de acuerdo con el delegado del trabajo que era mejor hacer concesiones, esta no fué la opinión de las pequeñas empresas que se negaron a abrir las obras.

Ante la posibilidad de entrar divididos frente a posibles maniobras de la patronal, los trabajadores decidieron mantener el comité elegido en Asamblea.

A la hora de cerrar este Combate, los periódicos publicaban la noticia de que las negociaciones se habían roto al no aceptar los patronos la tabla reivindicativa.

Que la lucha se salde con una victoria obrera está al alcance de la mano. La condición es que los trabajadores respondan de forma unitaria a la nueva maniobra de la patronal. La existencia establemente de un comité elegido en asamblea es buen instrumento para impedir maniobras de la patronal. En esta tarea debe contar con el apoyo de las centrales obreras. ■

Corresponsal

LA UNIDAD SINDICAL A DEBATE

La Coordinadora General de CCOO hacía una propuesta de unidad "principalmente a UGT y USO" en su última reunión celebrada en Madrid. Con carácter inmediato se propone a las centrales sindicales llegar a acuerdos concretos sobre la celebración "de un congreso de unificación constituyente que logre una sola central unitaria para todos los trabajadores". No entendemos bien si CCOO se refiere a un congreso en que se unifiquen las distintas centrales dando lugar a una central única, distinta a las actuales. Si es así sobra el término "constituyente". Pero CCOO no se refiere a este tipo de proceso hacia la unidad sindical. Se plantea su carácter constituyente por sus características de englobar a todos los trabajadores estén o no afiliados a los sindicatos. Es decir es su primitivo proyecto de constitución de un sindicato de tipo asambleario al que CCOO no ha renunciado.

Es por esta razón que en la misma propuesta se hace un llamamiento para proceder a la "inmediata elección en las empresas de organismos unitarios representativos de todos los trabajadores y expresión de su unidad". Suponemos, aunque nada dice respecto a ello la propuesta, que esta "unidad de base" es el fundamento del Congreso Constituyente al que ahora se añade la necesidad de llegar a acuerdos con las restantes centrales sindicales. Esto ultimo viene motivado porque CCOO no podía seguir haciendo abstracción de la existencia de otras centrales sindicales que no iban a aceptar perder su identidad en este proceso constituyente de carácter asambleario.

Pero en esta propuesta persisten la confusión entre afiliados y no afiliados, lo que supone un ataque a los derechos de los afiliados cuando cualquier trabajador pesa igual que un afiliado. Al mismo tiempo se contrapone a la auténtica representación de los trabajadores en base a la asamblea y sus delegados elegidos y revocables en la misma.

Si CCOO estuviera realmente por la unidad debería constituir de inmediato sus propias secciones sindicales de empresa, sin confundirlas con la asamblea de trabajadores. En base a la afiliación estricta conformar los órganos del sindicato que no delegase ninguna de sus funciones propias a estos "organismos unitarios". Y a partir de aquí proponer la unidad con las secciones sindicales de los otros sindicatos. A la vez que hacía a las direcciones de las otras centrales la propuesta de un congreso de unificación sindical.

La respuesta de la UGT a la declaración de CCOO sólo hace que aumentar la confusión entre los trabajadores. Primeramente se limitó a decir que todavía no había llegado el momento de la unidad sin explicar a qué había que esperar. Más tarde en unas declaraciones de Jerónimo Saavedra se explica como la UGT "creía que el congreso constituyente era un tema archivado". Para a continuación declarar que la UGT "es partidaria de un congreso para la fusión de las centrales, una vez lograda la unificación de las centrales socialistas USO y UGT de una parte, y de CCOO con otras centrales comunistas por otra". El representante de la UGT se inventa unos "obstáculos" sin cuya superación no es posible la unidad sindical. Ahora resultará que la unidad sindical requiere previamente la "unidad por afinidades ideológicas".

Con esta "contrapropuesta" la UGT se opone a una necesidad, ya ahora, de los trabajadores como lo es de avanzar en la unidad sindical. En vez de plantear claramente una propuesta de unificación de las distintas centrales en base a la defensa de los derechos de los afiliados y la democracia interna aplaza sine die la solución de este problema. ■

M. GARCES

el gobierno prepara un proyecto sobre los comités de empresa

En los despachos ministeriales del tercer gobierno de la monarquía, se está cociendo un decreto que pretende decirles e imponer a los trabajadores, qué deben entender por acción sindical y cuáles son límites y manera de llevarla adelante.

La primera cuestión a establecer con pujante claridad, es que el gobierno no tiene derecho alguno a regular la actividad sindical de los trabajadores y que no se puede aceptar el que dictamine sobre cuál debe ser el comportamiento sindical de la clase.

Todo cuanto establece el decreto va de hecho encaminado a poner unos límites muy inferiores a los alcanzados en la práctica por los trabajadores en los ultimos años, pero especialmente es un instrumento "legal" para combatir acérrimamente la soberanía de la asamblea de trabajadores y la organización de los comités elegidos y revocables como única representación y dirección de los trabajadores.

El gobierno busca no sólo no reconocer a los comités elegidos, sino regular la actividad de los sindicatos, y lo que es más, establecer lo que denomina comités de empresa con carácter permanente, desligados de la asamblea y su control, y estrechamente vinculados a los patronos con el fin de procurar su máxima burocratización.

Junto a todo ello se establece los distintos modos de intervención estatal y sus facultades supervisoras y sancionadoras.

Este proyecto por sí mismo supone una intromisión en la actividad sindical de los trabajadores; CCOO y UGT al reclamar que el gobierno organice elecciones en las empresas están avalando esta intromisión estatal.

Los trabajadores han aprendido por experiencia que la asamblea y los comités responsables ante ella son organización capaz de unir y representar a todos los trabajadores. Rechazando el decreto gubernamental y sin esperar para nada las maniobras del gobierno deben poner en pié sus comités elegidos en asamblea, estabilizarlos y coordinarlos. Deben exigir el derecho a organizarse como ellos quieran y a que sean reconocidas sus organizaciones. ■

A. RUANO

alternativa obrera y democrática a los ayuntamientos

Obreros, jóvenes, trabajadores, mujeres han comprobado en las elecciones la inmensa fuerza de los partidos obreros. Cuando depositaron su confianza en ellos querían acabar con la dictadura, conquistar los derechos nacionales, mejorar sus condiciones de vida. Ahora que conocen su fuerza ven que estos objetivos son posibles. Están dispuestos a exigirlos y reclamarlos con su lucha.

En esta situación los ayuntamientos designados por el franquismo, que no representan para nada la voluntad de la mayoría, que son meros ejecutores de las órdenes de Madrid, aparecen como una de las instituciones que hay que liquidar inmediatamente. Ellos han favorecido que los terrenos se convirtiesen en fuente de especulación encareciendo la vivienda, que las constructoras hagan sus pingües beneficios a costa de que no haya una sola zona verde, son los responsables de que la falta de escuelas y medios sanitarios adquiera en los barrios obreros proporciones escalofriantes.

La disolución de los actuales ayuntamientos, la exigencia de ayuntamientos libremente elegidos con plena autonomía en los asuntos municipales se sitúa como un objetivo inmediato del movimiento de masas.

Suárez y su gobierno ha explicitado su proyecto en la declaración programática del nuevo gobierno: reformar la franquista ley de Base del Régimen Local. La Reforma de esta Ley no puede dar origen a ayuntamientos libremente elegidos y con plena autonomía. De las Cortes en que Suárez tiene mayoría poco se puede esperar. Habrá que arrancar los ayuntamientos democráticos con la movilización de masas.

Los ayuntamientos en Cataluña, el País Vasco, etc. tienen también que poder ser instrumentos que permitan el desarrollo de los derechos de las nacionalidades. Son estas nacionalidades las que ejerciendo su soberanía por medio de Asambleas Constituyentes Nacionales deberían determinar las funciones de dichos ayuntamientos. Tampoco se pueden esperar de Suárez Ayuntamientos Catalanes, Vascos, etc... será preciso conquistarlos con la movilización de masas.

Pero sin esperar a conseguir una alternativa democrática a los ayuntamientos, las masas no están dispuestas a aguantar más los actuales. Tampoco se puede esperar nada de Suárez en este terreno. La promesa de elecciones municipales en una fecha indefinida le ha servido para argumentar que los ayuntamientos franquistas deben seguir tal cual. Sin embargo la presión del movimiento de masas ha obligado a dimitir a muchos de ellos. En algún pueblo de Guipúzkoa han sido sustituidos por Comités elegidos en Asambleas. En otros sitios donde ello no ha sido posible se ha propuesto la creación de gestoras provisionales. Dos problemas se plantean de inmediato o ¿Qué tareas deben tener estas gestoras? ¿Quien las debe componer?.

El PSOE ha avanzado una propuesta. Se deben gestionar el ayuntamiento segun las actuales leyes y con una gestora compuesta por una representación de todos los partidos según los porcentajes electorales.

Por nuestra parte creemos que si las tareas son gestionar según las actuales leyes no se ha dado ningún paso hacia ayuntamientos democráticos, hacia la construcción de escuelas, de centros hospitalarios, de acabar con la especulación del suelo y la vivienda.

Para nuestro partido la tarea esencial que deben tener es impulsar la lucha por ayuntamientos democráticos, autónomos, ligados a los problemas de las nacionalidades oprimidas. Impulsar la lucha por una Legislación de enseñanza gratuita de seguridad social suficiente, de acabar con la especulación, etc. La lucha por estos objetivos generales que van mas allá de un ayuntamiento permitirá las primeras conquistas en su propio pueblo.

Si estas son las tareas que debe impulsar no tiene sentido que esté compuesto por miembros de Alianza Popular, de centro democrático o de otros partidos burgueses que están tenazmente opuestos a estos objetivos.

Son los partidos de la clase obrera los que pueden llevar adelante la lucha por los objetivos arriba descritos y gestionar las primeras conquistas, son ellos los que deberían formar las gestoras provisionales. ■

A. Figueras

